

CUADERNOS DE EDUCACIÓN .



**Publicación Trimestral
N°17 (AÑO V) 2011
Gratuita– ISSN 0719-0721.**

Editorial (CdE nº17) .

En los momentos en que escribimos esta página editorial, la movilización estudiantil, tanto de los secundarios como de los universitarios sigue a todo vapor, estos no han depuesto ni sus paros, ni sus tomas y han rechazado la propuesta del Ministro Joaquín Lavín por considerarla poco concreta y ambigua. Efectivamente, hay en la propuesta del Mineduc un silencio revelador en lo que se refiere a los dos puntos centrales para una reforma de la Educación, que son 1) que el Estado financie significativamente a las universidades estatales y públicas, y 2) que se instale una superintendencia que controle y fiscalice a las universidades privadas.



De lo que propone el Mineduc, quizás lo más importante sea el punto que habla de que «los aportes del Estado a la educación superior alcancen el promedio de los países de la OECD en el mediano plazo». Pero, ¿significa

esto, que el Estado de Chile que sólo aporta un 0,3% a la Educación se va a poner a nivel del 1,4% que aportan los países que integran la OECD? ¿Qué significa en este caso mediano plazo? ¿Cómo se va a distribuir este aporte? Son estas las dudas que explican que la oferta del Gobierno, juzgada de ambigua, haya sido rechazada.



El movimiento estudiantil ha puesto su acento en el problema del lucro, rechazándolo como mecanismo organizador de la Educación superior y de los liceos. Incluso, no son pocas las voces que hoy se alzan descalificando al ministro por sus compromisos económicos con la Universidad del Desarrollo y pidiéndole por lo mismo su dimisión, pues ya no lo consideran como un interlocutor válido. El tema del lucro está puesto en la primera línea de la contienda y, en una encuesta realizada por el Mercurio, apenas un 53% opina que está bien que se permita el lucro. Creemos que el tema debe ser aun profundizado y esclarecido, pues a lo que se refieren los que ahora defienden las Universidades Estatales y públicas, es que no haya negocio en la

educación. Los inversionistas extranjeros, especialmente norteamericanos que han comprado universidades chilenas, no lo han hecho porque de pronto les interesara el desarrollo de la Educación en Chile, sino porque es hoy en día un pingüe negocio, uno de los menos regulado y controlado en nuestro país. Es a eso que nos referimos al condenar el lucro. A eso, que las universidades se transen en el mercado como cualquier producto, que gasten millones de dólares en propaganda, casi tanto como en las tiendas de retail. Si se investiga más en profundidad a algunas de estas universidades, las que francamente profitan con la educación, se encontrará que en ellas el escándalo y la estafa a los

todos los actores es garantía de éxito en la consecución de los objetivos de una educación democrática equitativa y de calidad en nuestro país.

Lo que ocurre en materia de educación y lo que acontece en la tienda la Polar, cuya crisis financiera puede desembocar en una catástrofe económica, como la que se conoció recientemente en los EEUU y Europa con el negocio inmobiliario, revela que el actual modelo hace agua por todos lados, que el mercado no es el mejor instrumento de regulación y que nuestro país debiera avanzar en un modelo político y económico que



estudiantes se aproxima y asemeja bastante a lo que ocurre en La Polar.

Estamos de acuerdo en la petición de los estudiantes en relación a que el Consejo de Rectores no tome iniciativas de acuerdo con el MINEDUC en forma aislada. La unidad de

considere una activa participación reguladora y fiscalizadora del Estado que vele por los intereses de la gran mayoría del país: los trabajadores.

Universidades públicas.

Por Manuel Riesco Larraín .-

Desde el golpe militar, Chile ha venido desmantelando su bien notable sistema de educación pública, construido a lo largo del medio siglo precedente. El intento de reemplazarlo por un mercado basado en elevados cobros forzados a los estudiantes y sus familias ha resultado en un fracaso rotundo. Todo ello afecta especialmente a la educación superior, cuya crisis han puesto de manifiesto por estos días cien mil alumnos, académicos y funcionarios, manifestándose en las calles. El país enfrenta hoy el desafío de reconstruir su sistema nacional de educación pública. Ello es posible también en el nivel superior, puesto que, felizmente, puede apoyarse sobre lo actualmente existente, así como en la experiencia de haberlo realizado antes, especialmente durante los años de la reforma universitaria.

Una universidad por excelencia combina de modo equilibrado las funciones de docencia, investigación y extensión. Sólo cinco de las sesenta así llamadas “universidades” chilenas cumplen con este requisito elemental. Un reciente trabajo del Centro de Investigación de la Estructura Social de la U. de Chile (CIES) y el Foro Aequalis las clasifica como “universidades de investigación.” Incluye otras seis en la categoría de “universidades con

investigación selectiva,” y seis adicionales en la categoría “universidades esencialmente docentes con investigación selectiva.”

Las cinco primeras son, en orden de importancia, las universidades de Chile, Católica de Santiago, de Concepción, de Santiago y Austral. Dos son estatales y tres particulares. Las seis que les siguen incluyen otras tres estatales y tres particulares. Todas ellas al igual que las cinco anteriores, pertenecen al Consejo de Rectores de Universidades Chilenas, conocido por el poco asentador acrónimo CRUCH.



Solo en la tercera categoría, “universidades esencialmente docentes con investigación selectiva,” logran entrar raspando cuatro

universidades privadas. Las cuarenta y tres instituciones restantes que también se rotulan como “universidades,” sencillamente no realizan investigación ni extensión significativa. Todas las demás privadas caen en estas categorías, junto a algunas sedes estatales regionales.

La enorme brecha entre unas y otras se puede apreciar en diversos indicadores. De partida, las publicaciones científicas se concentran de manera abrumadora en las cinco primeras y las restantes en las dos categorías que les siguen. Las 43 “universidades” de docencia simplemente no tienen publicaciones en revistas de prestigio internacional.

De acuerdo a los resultados preliminares de un estudio encargado a CENDA por la Confederación de Estudiantes de Chile, CONFECH, las primeras atienden a un quinto del alumnado universitario, pero concentran un 39 por ciento de los académicos a jornada completa y un 43 por ciento de los que tienen grado de doctor. Correspondientemente, su presupuesto representa el 41 por ciento de los ingresos de explotación de todas las universidades.

De esta manera, en relación al promedio de las 60 “universidades” existente en el país, estas cinco “universidades de investigación” invierten el doble de recursos, académicos a jornada completa y con grado de doctor o doctorados, por alumno. Si se las compara con las dos categorías más bajas del estudio de CIES, que concentran un 28 por ciento del alumnado, estas brechas aumentan a cuatro, más de cinco y casi siete veces, respectivamente.

Incluso si se las compara con las doce universidades clasificadas en categorías de “universidades con investigación selectiva,” que les siguen, las cinco universidades de investigación prácticamente las duplican en presupuesto, académicos a jornada completa y académicos con doctorado, por cada estudiante.

El que casi todas las que se dicen universidades estén acreditadas como tales quiere decir bien poco en este aspecto. El único requisito verdaderamente importante para obtener la acreditación consiste en demostrar que son un buen negocio. Los



demás son flecos. Por ejemplo, no se les exige que tengan publicaciones científicas, académicos a jornada completa o con post grados, entre muchos otros requisitos elementales. De hecho hay once “universidades,” todas acreditadas, que informan tener menos de un académico a jornada completa ¡por cada mil alumnos!

De este modo, como escribe el historiador Perry Anderson, “solo en la noche de nuestra ignorancia adquieren el mismo color todas las formas extrañas.”



En otras palabras, no todas las que se dicen “universidades” dan la talla mínima para serlo. Como se ha mostrado, en estricto rigor solo cinco de las que utilizan este nombre lo son verdaderamente. Otras doce siguen sus

pasos, pero a muchísima distancia. Las restantes 43 son instituciones que imparten docencia en nivel terciario, lo que es importante. Quizás todas aspiran y se esfuerzan seriamente en mejorar su calidad, lo cual es meritorio. Sin embargo, ello no las convierte en verdaderas universidades, ni mucho menos.

La solución parece bastante evidente: para mejorar el sistema universitario hay que consolidar y ampliar las cinco verdaderas universidades existentes y estimular a todas las demás para que se eleven a esa condición.

Para concluir en algo tan sencillo ciertamente no se requiere contratar una comisión de expertos internacionales, sin embargo, el estudio encargado a la OCDE propuso exactamente eso.

El problema es que el sistema actual de financiamiento promueve exactamente lo contrario: empuja hacia abajo a las pocas universidades que realizan investigación y extensión, estimulando que todas se conviertan en simples “universidades de docencia.”

Según el mismo estudio del Foro Aequalis antes citado, la matrícula de las “universidades de investigación” ha aumentado en un 13 por ciento entre 2005 y 2010, mientras en el mismo período las “universidades esencialmente docentes con investigación

V I S Í T A N O S

<http://cuadernosdeeducacion.wordpress.com/>

selectiva” lo ha hecho en 51 por ciento y las “docentes no selectivas de tamaño mayor,” que se encuentran al fondo de la escala de calidad, han crecido ¡un 81 por ciento!

La razón es bien simple: se hace descansar el grueso del financiamiento en los pagos de los alumnos, que malamente alcanzan para financiar la función de docencia. Aún a costa de representar una carga insostenible, además de ineficiente e injusta sobre ellos y sus familias. De este modo, desde el punto de vista de mejorar el sistema universitario, el mecanismo de financiamiento basado en los aranceles resulta además perverso.

En las universidades del CRUCH, al que pertenecen casi todas las que realizan investigación y extensión, además de docencia de relativa buena calidad, los aportes de las familias alcanzan a 2,2 millones de pesos por alumno al año, en promedio, según el estudio de CENDA para CONFECH. Ello no alcanza a cubrir ni la mitad de sus ingresos de explotación, que ascienden a 4,6 millones de pesos por alumno al año, en promedio. Los estudiantes de universidades privadas, en cambio, que concentran a todas las que hacen sólo docencia, aportan un promedio de 2,7 millones de pesos por año, lo que alcanza para cubrir en buena forma todo el presupuesto de las mismas, que suma la misma cantidad por alumno.

Lo anterior explica el raro contraste que un millón de santiaguinos que transitan a diario por la plaza Baquedano pueden apreciar a simple vista. Cruzando el Mapocho por el puente Pío-Nono, se alza la venerable Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, el

centro académico más antiguo y prestigiado del país, que alberga buena parte de los profesores a jornada completa y doctorados y produce lo más de la investigación científica en derecho del país. Sin embargo, el edificio es muy antiguo y relativamente pequeño, lo que no sería nada si no fuese porque su estado de mantención deja muchísimo que desear.



Justo al frente, cruzando Bellavista, se alza una de las “universidades docentes no selectivas de tamaño mayor,” que se encuentra al fondo de la tabla de calidad según el estudio de Aequalis. Su flamante y enorme edificio es deslumbrante, más parecido a un aeropuerto que a una universidad. Paga sumas ingentes en arriendos a su inmobiliaria relacionada – que retira de este modo utilidades no despreciables que son ilegales para las universidades – y sueldos millonarios a sus directivos, aparte de cifras multimillonarias en publicidad. Por cierto, funciona en base a profesores “taxis” a los que ofrece poco más que una pizarra y ninguna estabilidad laboral, los que se allanan a ello entre otras cosas porque no tienen

postgrados. Que se sepa, no ha producido jamás un sólo “paper” que amerite ser publicado en revistas de prestigio. Eso no le impide estar acreditada, puesto que ciertamente es buen negocio. Para todo eso le alcanza con las matrículas que cobra a sus alumnos, que las pagan encallándose hasta las orejas y por toda la vida. Agradecida de tal milagro, le sobró plata para proponer al municipio, que felizmente rechazó la oferta, la construcción en el parque aledaño de una monstruosa estatua ¡del Papa!

Esto no da para más. Eso lo saben bien los sus estudiantes, administrativos y muy especialmente, sus académicos y lo están manifestando. No lo soportan los estudiantes y sus familias, sobre las cuales se está descargando un impuesto anual equivalente a

más de la mitad del total de los impuestos a la renta pagados por todas las empresas – incluidas las del cobre – y personas pudientes del país el año 2009. Según un reciente estudio del Banco Mundial, los veterinarios van a tener que destinar a servir el crédito universitario ¡un tercio de sus salarios! Tampoco lo soportan los funcionarios administrativos, que soportan bajos sueldos y no tienen derechos laborales.

Muy especialmente, no las soportan los académicos, que constituyen hoy uno de los grupos de trabajadores chilenos con sueldos más deprimidos, empleo más precario y condiciones de trabajo más deficientes. Precisamente, lo más grave del desmantelamiento del sistema nacional de universidades públicas es haber debilitado seriamente la institución que todas las





sociedades civilizadas han construido para sostener de modo estable a la capa intelectual que destinan al quehacer científico, artístico, cultural; en una palabra, a las llamadas cosas del espíritu.

La crisis del sistema universitario superior recae por igual en los alumnos, académicos y administrativos de las universidades estatales y particulares, en las del CRUCH y las privadas. Los afecta a todos por igual, aparte de las familias de los primeros que no hayan como pagar la cuenta. Por este motivo, se manifiestan todos juntos, encabezados por los rectores de las universidades públicas y privadas.

La solución es sencilla, como se ha mencionado. Como recomienda la OCDE, hay que aumentar significativamente el presupuesto público, que hoy cubre menos de

un 15 por ciento del total según esta fuente. Del 0,4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) que representa en la actualidad, hay que elevarlo en pocos años al 2 por ciento del PIB que representaba hace cuarenta años atrás. El incremento hay que destinarlo prioritariamente a consolidar, fortalecer y ampliar las cinco universidades públicas mejores, que evidentemente son las que mejor pueden responder a este desafío.

Al mismo tiempo, hay que estimular a todas las demás para que se eleven a este nivel. Para ello, como dice la OCDE, es necesario dirigir la mayor parte de los recursos a fortalecer las instituciones mismas, de modo que puedan ofrecer condiciones estables y adecuadas de trabajo a sus académicos y funcionarios. Muy especialmente, como también recomienda la

OCDE, hay que dar un financiamiento basal adecuado a las universidades estatales.

Al mismo tiempo, hay que destinar parte significativa del aumento del financiamiento estatal a otorgar becas estudiantiles, de modo de aliviar progresivamente la carga insostenible, injusta e ineficiente que hoy soportan los estudiantes y sus familias.

Una palabra adicional: en paralelo hay que reconstruir el sistema nacional de educación pública superior técnica y vincularlo al sistema universitario. Como se ha mostrado en otra nota, si se generaliza a todo el país el ejemplo del Centro de Formación Técnica de Lota-Arauco, el único público y gratuito del país, bastaría con aumentar el gasto educacional total en 7,3 por ciento para ¡duplicar la cobertura de educación terciaria!

Parece una tarea ardua. Sin embargo, es precisamente lo que el país logró realizar durante la Reforma Universitaria. Entre 1967 y 1973, se duplicó el sistema universitario, transformando universidades que no merecían el nombre de tales en establecimientos nacionales modernos y comprometidos con el desarrollo del país y el destino de su pueblo. Gratuitos además.

Ello se logró incrementando los aportes estatales a todas las universidades existentes, exigiendo a cambio que realizaran docencia, investigación y extensión, que contrataran académicos a jornada completa con buenas condiciones de salarios y trabajo, lo mismo que sus funcionarios. Que respetaran la libertad de cátedra y **no discriminaran en el acceso, promoviendo el de los obreros y sectores**

populares. A todos se exigió garantizar lo anterior mediante gobiernos internos democráticos, con participación de todos los miembros de la comunidad universitaria, a la cual se respetó su autonomía en estas condiciones.

No parece mala idea intentarlo de nuevo.

Manuel Riesco Larraín. Economista, investigador de CENDA (Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo) y miembro de la Junta Directiva de la Universidad de Valparaíso.

Fuente: Autorizado en <http://blog.manuelriesco.cl/2011/05/universidades-publicas.html>



Recensión del Libro “Se derrumba un mito: Chile reforma sus sistemas privatizados de educación y previsión” de Manuel Riesco Larraín .

Por Gustavo Quintana Muñoz

El autor, Ingeniero Civil (U.de Chile), Vicepresidente de Cenda en Chile y Coordinador externo de investigación de UNRISD ,director de la revista Encuentro XXI, que ha desempeñado diversos cargos administrativos y docentes en universidades chilenas y norteamericanas, consultor habitual de diversos gobiernos y del Parlamento, y que ha escrito extensamente sobre el desarrollo social de Chile y América Latina, nos ofrece en este libro un análisis de los efectos de la ola privatizadora en la educación y en la previsión , con el rigor al que nos tiene habituados.

El título de esta obra, incomprensible para muchos, se aclara ya en el prefacio, al igual que las razones para que este libro aparezca en el momento en que se edita. Allí se indica que son los efectos sociales, consecuencia de las privatizaciones en ambos ámbitos, los que proporcionan el nexo de unión, y que son los acontecimientos sociales producidos en los años 2006 y 2007, que son analizados con gran clarividencia, casi premonitoriamente, por el autor, los que señalan que el fracaso de las privatizaciones abre finalmente la

posibilidad del inicio de una reforma de los sistemas privatizados de educación y previsión. ¿Qué representa el año 2007 como fecha de edición? En Diciembre de 2006 la presidenta Bachelet envía al Congreso un proyecto de ley con un amplio programa de reformas al sistema privado de pensiones y días después recibe el informe de la comisión asesora presidencial para la calidad de la educación que, si bien solo llega a resultados concretos limitados o nulos, tiene el mérito de sacar a la luz pública un vigoroso movimiento de reforma de las privatizaciones desarrolladas en ambos sectores, principalmente el movimiento de los pingüinos, que empuja a la comisión citada a plantear por primera vez en 25 años la derogación de la legislación que rige a la educación desde Pinochet. En suma, el profundo descontento por los efectos de las privatizaciones en ambos sectores abre un proceso de reforma de los sistemas sociales privatizados cuyos resultados finales dependerán del desarrollo del movimiento contra el proceso privatizador y la forma como crezca la movilización social contra él durante los próximos años. Cuatro años después de la edición de este libro no sólo se mantiene este movimiento de reformas sino que incorpora nuevos sectores que exigen su participación en los asuntos públicos y generales del país, entre los cuales el enorme movimiento contra las represas en Aysén es el mejor ejemplo. Antes de analizar más detalladamente la magnitud

*** Texto leído en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Valparaíso el 4 de mayo de 2011. Compartió la mesa junto al autor reseñado el profesor Manuel Riesco (CENDA).**

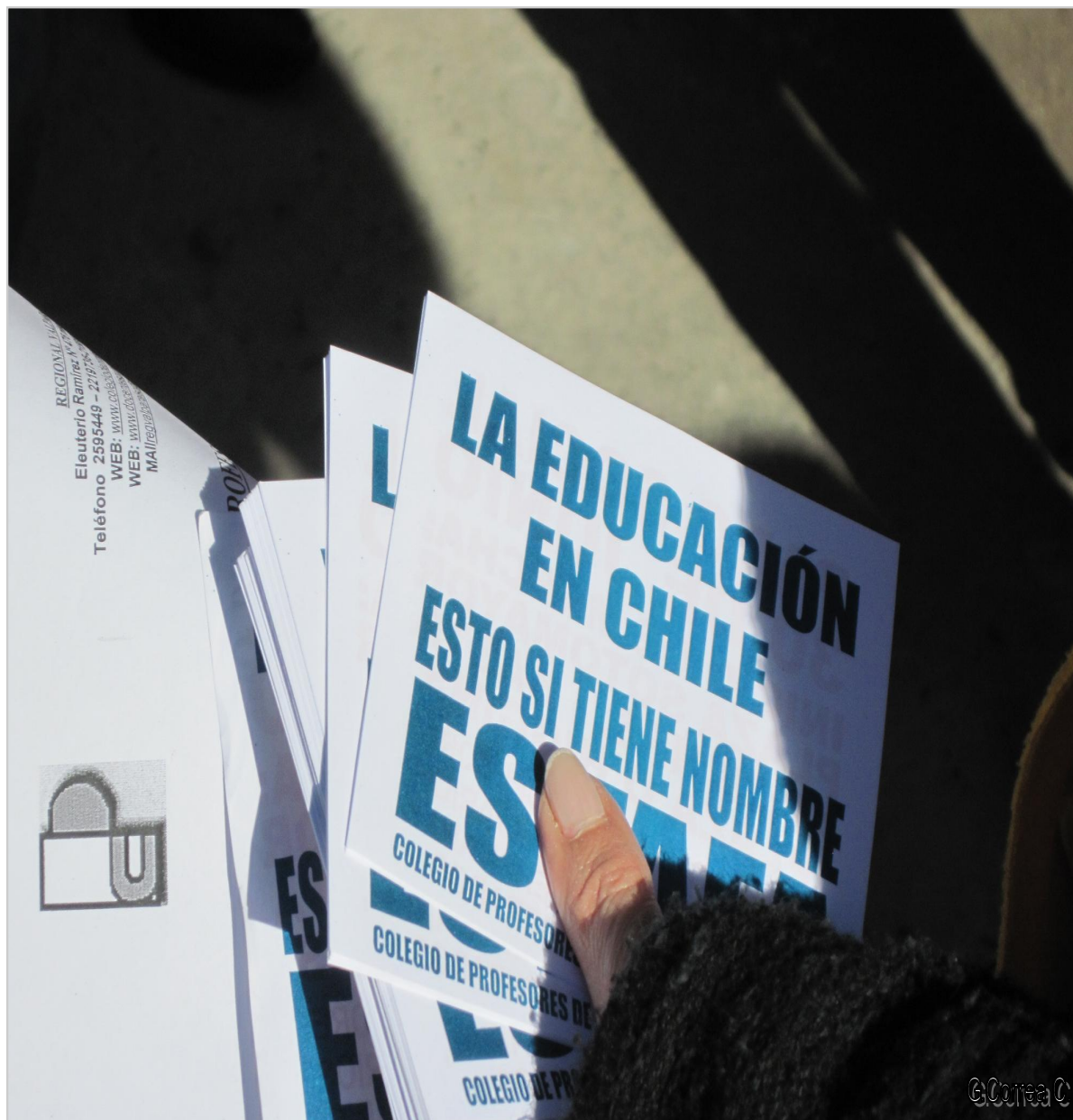
del fracaso del proceso privatizador, tanto en educación como en previsión, el autor ensaya someramente el ubicar las políticas sociales chilenas en el contexto histórico de un siglo, dividiendo este lapso en dos partes: de 1924 a 1973 y de 1973 hasta hoy, señalando las dos grandes estrategias desarrolladas por el Estado en la transición del país a la era moderna, y expresando su opinión de que en este instante el país experimenta otro gran giro en su estrategia de desarrollo.



“El 11 de Septiembre de 1924, en un marco de movilizaciones sociales, una junta militar de corte progresista toma el poder y promulga la primera legislación social, creando las instituciones económicas y políticas básicas del Estado chileno moderno, incluida una nueva constitución política. La estrategia de desarrollo que se adopta, cuyo guía es el

Estado, tiene como norte el progreso tanto económico como social y se desenvolverá de manera ascendente a lo largo de medio siglo, impulsada por gobiernos democráticos de variada orientación ideológica, culminando en las profundas reformas democráticas del presidente Frei Montalva y alcanzando su climax revolucionario durante el gobierno del presidente Allende. Esta estrategia deja al país un capital cultural social y económico inmenso y alcanza en el ciclo económico 1958- 1971 una tasa de crecimiento del PIB que no volverá a repetirse hasta los años 90. Un golpe militar de extrema derecha, encabezado por Pinochet, pone término violentamente a esta estrategia e instaura una nueva sobre los principios del neoliberalismo, las privatizaciones y el mercado como único ordenador.

En las tres décadas durante las cuales el país se ha desarrollado con una orientación neoliberal se distinguen dos períodos de aproximadamente 17 años cada uno. Los primeros corresponden al régimen dictatorial, preocupado de crear un ambiente económicamente amistoso a los negocios de corto plazo y de un manejo de los asuntos públicos mayormente en interés del empresariado, de las trasnacionales y de la minoría de altos ingresos de la población, en contrapartida con un retroceso brutal de todo lo que el país había desarrollado en materia de avance social. Si se puede establecer alguna diferencia entre ambos períodos, lo es la persecución sangrienta de los opositores a la dictadura, frente a una lenta transición hacia la democracia en el segundo período, junto a una lentísima recuperación de los derechos



V I S Í T A N O S

<http://cuadernosdeeducacion.wordpress.com/>

sociales perdidos. En lo demás, sólo más de lo mismo. Un ejemplo de esto es el resultado de que un puñado de empresas mineras, casi todas extranjeras, que en 2006 remesaron a sus casas matrices unos veinte mil millones de dólares, cifra del mismo orden de magnitud que el presupuesto total del Estado chileno. La paradoja entre el crecimiento durante este período (2,3 veces entre 1990 y 2005) y el aumento del gasto público (2,8 veces en el mismo período) y el creciente descontento que explotó en 2006 y que sigue aumentando, sólo se explica por una de las distribuciones de ingreso más desiguales del mundo, lo que hace que el aumento del gasto público sólo represente 1/5 del PIB, lo que se refleja en un aumento de los salarios (53 % de 1990 a 2004) menor en un 50% del incremento del PIB en el mismo período, y que recién en 1999 volvió a los niveles que estos tenían justo antes del golpe. Esta situación afecta especialmente a los profesores que, a pesar de recibir un aumento del mismo orden que el PIB, aun no recuperan los niveles de sueldo que poseían antes del golpe.

Finalmente, Manuel Riesco entrega los elementos de análisis que muestran irrefutablemente que el modelo neoliberal de sociedad, el mercado regulador absoluto y las privatizaciones como freno de la acción del Estado son la causa del fracaso de los sistemas de educación y previsional .

Un millón de estudiantes secundarios estremecieron Chile en 2006, con la mayor manifestación social desde las protestas de los años 80, exigiendo la derogación de

la LOCE, motor del sistema de privatización de la educación, siendo prueba palpable de que el aumento del presupuesto de la educación en 4,4 veces (1990 – 2005) no basta para detener el deterioro constante después de 25 años. La desregulación de todo el sistema responde a la falta de objetivos confesables de país, reemplazados por un vago anhelo de llegar al desarrollo, lo que lleva a Chile a solicitar su ingreso a este mundo desarrollado (OECD). Este solo hecho, que obliga a comparar la educación de los nuevos socios con la nuestra sólo sirve para exponer nuestra miseria educacional . Contrastando así nuestro sistema de pobre aporte fiscal a la educación, de acelerado proceso de privatización, segregación vergonzosa y educación de dos calidades ,para pobres y para ricos, y la caída en la calidad de la educación superior : sólo 11 de 60 universidades acreditadas por investigación, con las características del de los nuevos socios. Estos tienen una estructura mayoritariamente pública (88% en OECD, 92% en U.E de aporte estatal) con fuerte participación del estado en la educación superior (25% del aporte estatal total OECD promedio, con ejemplos que lo superan (Canadá con un 40% , EEUU, 38,6%, Corea , 33,4%, Finlandia , 28,9% y unos 8 a 10 países más). El objetivo que realmente persigue nuestro modelo es preservar, por una parte, la calidad de la educación para una elite ideológica y de poder, restringida a no más del 10% de la población dejando a cerca de un 50% sin ningún otro tipo de formación que una mala educación secundaria Para el resto de los estudiantes sólo quedan ofertas

docente de todo lo que financie completamente(subvenciones al 90% de los estudiantes de Chile), sin perjuicio de continuar su política tradicional de apoyo financiero a las instituciones educacionales particulares sin fines de lucro , que así lo ameriten

enorme costo para el Estado y los enormes beneficios para los mayores grupos económicos y compañías de seguros.

A pesar de que el Estado aseguró en la reforma previsional una pensión básica para la mayoría de los cotizantes de las AFP con



En suma, la base de una reforma es que el Estado aporte el financiamiento suficiente y en las modalidades más adecuadas (volver al 7% del P.I.B., contra el 3 a 4 % actual).

Finalmente, Manuel Riesco analiza la segregación social y el deterioro en las pensiones de los sectores medios, producto de la privatización de la previsión, así como el

capacidad de ahorro insuficiente, mantuvo como pilar único de las pensiones de los sectores medios la capitalización individual, que entrega a estos sectores pensiones muy inferiores a las que aun se otorgan a la mayor parte de los adultos mayores jubilados con el sistema antiguo (3 pilares de financiamiento).

El sistema chileno destina la totalidad de los

descuentos previsionales al mercado de capitales y a la mantención de las propias AFP y de las compañías de seguros relacionadas, a diferencia del resto del mundo, donde sólo una porción menor de las cotizaciones se destina al mercado de capitales. En suma, la privatización del sistema de pensiones de 1981, es un verdadero embargo sobre las contribuciones de los asalariados a la seguridad social, principalmente en beneficio directo de los mayores conglomerados económicos.

Lo más incomprensible de este modelo de previsión es que el principal recaudador de cotizaciones de seguridad social del país, el Estado, entregue estas a las AFP y posteriormente tenga que asumir el pago de la mayor parte de la pensión de los adultos mayores (unas $\frac{3}{4}$ partes de los 1.594.000 adultos mayores), pagando las AFP, con los fondos acumulados, las pensiones de unos 70.000 adultos mayores y la quinta parte de las pensiones mínimas garantizadas, siendo finalmente los únicos cotizantes beneficiados con la privatización del sistema a lo sumo los sectores perteneciente al quintil de mayores ingresos.

Queda pendiente aun investigar a fondo la administración que de los fondos de pensiones han hecho las AFP, pues las cotizaciones, en un tránsito muy alambicado, son invertidas en gastos administrativos de las AFP, traspasos a las compañías de seguro, que a su vez pagan algunas pensiones (de por vida, e incapacidades), inversión en el mercado de capitales, préstamos al Estado (nunca más

allá de un 25% del total), recuperación de parte de estos préstamos por nuevas cotizaciones al fondo de pensiones, etc. En estos vericuetos es fácil aparecer con gastos inexistentes, falsear las ganancias y presentar contabilidades discutibles o fraudulentas.

Ante la interrogante de qué hacer, sugerencias muy simples, tales como acoger la modalidad que la mayoría de los países han adoptado, con presencia activa del Estado sobre la base de tres pilares de financiamiento: pensión básica, financiada por el Estado, ahorro o capitalización con parte de la cotización y reparto anual.



¿Qué niveles debiéramos esperar? No inferiores a los que entregaba el sistema anterior a 1973 y que es el que aun reciben los antiguos pensionados y los que no pudieron integrarse al sistema de AFP.

La recuperación por parte del Estado (hoy en día administrador más eficiente que las AFP) de todos los fondos que recauda para las AFP y asunción de la potestad que tuvo en el pasado. No es algo imposible, y países como Polonia y Hungría ya lo hicieron tras experimentar el modelo que Chile les había vendido y que resultó ser un pésimo negocio para el Estado

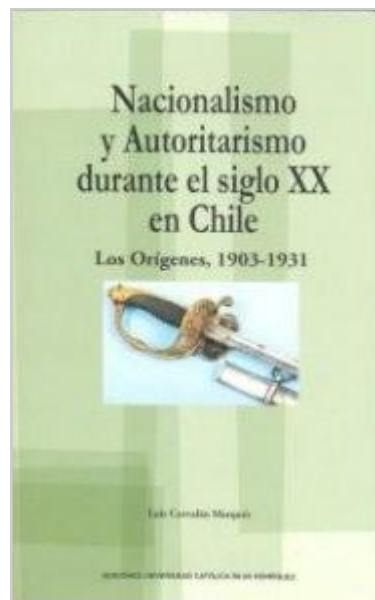
Presentación a Nacionalismo y Autoritarismo durante el siglo XX en Chile. Los orígenes, 1903-1931 de Luis Corvalán Marquéz

(Santiago de Chile, Ediciones Universidad Católica Silva Henríquez, 2009)*

Pablo Aravena Núñez

Hace poco tiempo solicité el texto de presentación de un breve libro de mi autoría al filósofo español Manuel Cruz, quien en un gesto amable y condescendiente escribió: la lectura del libro de Pablo Aravena “me planteó un problema no sé si de fácil solución. ¿Qué añadir a lo ya expuesto?”. En esta ocasión debo escribir lo mismo, pero como evidentemente la relación es inversa, es decir, como ahora el presentado es un prolífico historiador y el presentador un profesor joven e historiador advenedizo, no hay condescendencia sino mas bien angustia (cuando no impotencia). A lo que habría que agregar que el libro hoy en cuestión es un estudio aplastante de 461 páginas. Pero como traté de zafarme dos veces de la invitación de su autor y éste insistió, me obligo entonces a articular algunas ideas que no traten de ser el mero resumen del libro. Como les gusta decir a los burócratas “autoevaluadores”, en adelante trataré de “convertir mis debilidades en fortalezas”. Lo que para el caso debe ser entendido como la novedad –la perspectiva diversa– que pudiera aportar la lectura que del

presente libro hace un profesor de 34 años – que además fue alumno atento del autor– frente a temas que requieren bastante más tiempo de formación, trabajo, elaboración y, sobre todo, experiencia.



Que todo libro, por científico u objetivo que quiera pasar, guarda la huella indeleble de su autor, no es nada nuevo. Lo que aquí puede ser interesante es comenzar planteando de qué huella se trata. Porque el presente libro que nos entrega Luis Corvalán, al igual que sus anteriores obras, es ante todo un intento de explicarse y explicar, o mejor dicho de comprender y hacer comprender (sin justificar) dos fenómenos que cruzan la subjetividad de buena parte de una generación que aún se considera “de izquierda”: la extrema e impune violencia experimentada en nuestro país a partir de 1973 y el descalabro de la utopía que insufló el espíritu revolucionario chileno. Se trata de una perplejidad máxima

que de modo muy entendible nos envía a la historia, pues como anotó Nietzsche: lo insoportable no es el dolor, sino su falta de sentido.



En la presente obra el acento está puesto en el primer componente de esta perplejidad: la violencia política desatada, pero también su no despreciable grado de legitimidad apelando a una lógica en que se articulan pseudoargumentos que suenan hasta hoy. Imagino que la escucha cotidiana (en la calle, en la micro, en el metro e inclusive en la universidad) de frases como “... pero si siempre ha habido ricos y pobres”, “la raza es la mala”, “Dios sabe por qué hace las cosas” o “el trabajo dignifica”, deben ser aún más lacerantes en los oídos de personas como Luis Corvalán que para uno que, a fin de cuentas,

no pasó por lo que ellos, o pasó de otra forma. Porque del tradicionalismo y el nacionalismo (ideologías de cuya recepción emana gran parte de la violencia y autoritarismo chileno, según Corvalán) no tengo más experiencia directa que mis doce años de educación marista a cargo de curas franquistas por la década de los ochenta, es decir, en plena dictadura. Una educación que se planteó rectificadora del ser nacional en los siguientes términos (y citó aquí el texto de introducción a los Programas Transitorios que imperaron desde 1974 hasta 1981): [2]

“Todos los canales que confluyen en el hacer docente del país han sido puestos al servicio de una causa única y clara: lograr la superación de las limitaciones nacionales mediante una adecuada formación de las generaciones emergentes. Todo ello dentro de cánones estrictamente chilenos, asegurando el mantenimiento de las virtudes propias del ser nacional y rectificando aquellas conductas que casi siempre por influencia foránea, pudieran constituirse en freno del proceso reconstructivo”.

Y es que si uno sigue el libro de Corvalán cae en la cuenta que este componente tradicional-nacionalista estuvo hace mucho presente en Chile –desde inicios del siglo XX, como sostiene el autor– y que la violencia desatada en contra de un enemigo interno no debió esperar la doctrina de Seguridad Nacional

difundida en el contexto de la Guerra Fría. Así se puede constatar, de otro modo, a partir de una anécdota referida por el poeta Armando Uribe en su ensayo “El Fantasma de la Sinrazón”:

“Poco después del Golpe de Estado de 1973, el presidente Frei Montalva, que lo fue hasta 1970, le explicó así el 74 en Nueva York e un ex ministro suyo que era alto funcionario de Naciones Unidas: «Toda la historia de Chile consiste en evitar que los indios atravesen el río Bío-Bío (la frontera de guerra con los araucanos); con el gobierno de Allende y la Unidad Popular, los indios lo atravesaron; ¡por eso se produjo el Golpe!»” [3]

“El gobierno” es entendido como medio para la mantención de un orden natural puesto en peligro por un “enemigo” interno no-chileno, en este caso los salvajes, categoría que abarca desde aquellos que Frei llama “araucanos” hasta los comunistas y marxistas en general. He aquí el puntal de la lógica tradicional-nacionalista en su traducción chilena, en la voz que se supone más conciliadora y ecuánime de la historia política del siglo XX chileno.

De una facción de la elite que se resistía a la emergencia de las masas media y proletaria, a las mismas capas medias en su pugna política, para pasar a los sectores populares subalternizados, así me represento el trayecto de la ideología que con todo detalle aborda el libro de Luis Corvalán. Pero previo a ese

trayecto está el momento de recepción de la lógica tradicional-nacionalista formulada –para martirio de sus sostenedores– foráneamente. Habrá que recordar en este punto la ironía que deslizaba Borges en “El escritor argentino y la tradición” (1951): «El culto argentino del color local es un reciente culto europeo que los nacionalistas deberían rechazar por foráneo». En efecto, es impensable el trayecto ideológico de la elite chilena sin lo que el autor llama “la mutación cultural finisecular”, momento en que el pensamiento europeo –en un pliegue aristocratizante– se rebela en contra del liberalismo, la democracia, la política de partidos, el parlamentarismo, como de su doctrinarismo abstracto, racionalista y universalista. El diagnóstico es el de una civilización burguesa en decadencia, que da paso –en la vertiente predominante– a la reivindicación de las estructuras tradicionales (naturales, étnicas si se quiere), como también a posturas heterodoxas de un socialismo que ha revisado su composición ilustrada e incorporado elementos románticos, como la postulada por Mariátegui en que no se podía pensar la revolución sin la tradición (pero que no forma parte del objeto del presente libro).

Por mi particular ocupación –la filosofía de la historia– hay propuestas del presente libro que me provocan más que otras. El autor lo hace bastante explícito: la relación entre los postulados políticos del tradicionalismo y nacionalismo (tanto europeos como en su versión local) implican una particular concepción de la historia. Lo relevante en este punto es que todos vivimos teniendo como supuesto una idea (aunque sea “mediana y vaga”) de la Historia, que actúa como matriz

interpretativa de los acontecimientos y, en seguida, nos abre paso a las valoraciones que de ellos hacemos y a adoptar unas decisiones en vez de otras. La matriz general de tal concepción, como se sabe –y Karl Löwith fue el mayor sostenedor de esta tesis– nos viene de la cultura bíblica: un solo proceso, universal, con un inicio y un fin, un proceso cargado de sentido “si se lo considera moralmente”, como sostuvo León Dujovne, pues – pese a los vaivenes y pruebas– se impone la conciencia de que “el desarrollo de la vida de la humanidad conduce a un futuro ‘mejor’ [4] Sabido es también que la concepción judeo-cristiana dejaba escaso margen (real, pues siempre se la reivindicó discursivamente) a la libertad humana tras la idea de Plan de la Providencia, versión temporal de la idea de Orden Natural



G. Correa C.

que caracterizó al pensamiento político medieval. En este concierto el humanismo del quattrocento fue abriendo paso a la figura del hombre como sujeto agente y cognoscente, es decir como lector y constructor del mundo y

de él mismo. No cabría pensar los procesos políticos autoconstituyentes sin el humanismo como sustrato. Según la interpretación de Alain Finkielkraut, la consigna revolucionaria francesa de una “igualdad” sin diferencias de títulos, funciones ni linajes significaba, más allá de lo evidente, que “todas las determinaciones empíricas se veían fuera del juego”. La nueva

Nación francesa “nacía” –y valga bien esta redundancia– afirmando radicalmente la autonomía de sus “asociados” “liberándoles de toda adscripción definitiva”. “El poder mismo que soportaban hallaba origen y legitimidad en la decisión de vivir juntos y de concederse unas instituciones comunes” [5] y no por el mero cumplimiento de unas leyes que determinan el orden de la sociedad. Pero es este un “nacionalismo cívico”, ilustrado, libertario y humanista. Claramente no es el recurso al que echarán

mano las clases dominantes.

Ante los ojos conservadores y tradicionalistas, los revolucionarios franceses reeditaban –pero ahora por mera voluntad y decisión– un pacto asumido por aquellos sectores como natural

“en el origen de la sociedad”. Radical será la sentencia de Joseph de Maistre: “Una asamblea cualquiera de hombres no puede constituir una nación. Una empresa de ese género merece alcanzar un lugar entre las locuras más memorables”. La Nación no se “construye” sino que la “encontramos”, es ella quien nos constituye y, de acuerdo con esta conformación, adoptamos la legalidad más acorde con la Nación. La Nación guarda un cuerpo de leyes que preexisten a las leyes humanas. Tal como ha sostenido Althusser a propósito del componente tradicionalista-feudal de Montesquieu: “Si hay leyes antes de las leyes, se comprende que *no hay* ya contrato, ni ninguno de esos peligros políticos a los que arrastra a los hombres y a los gobiernos la sola idea de contrato”. Montesquieu “reemplaza por el contrato entre *iguales*, por una obra de arte humano, lo que los teóricos feudales atribuían a la naturaleza y a la *sociabilidad natural del hombre*”. [6]

Lo que para mí resulta interesante a partir de los planteamientos de Corvalán es el planteamiento de dos preguntas: ¿cuánto de nuestra idea de la historia se halla a estas alturas anclada en postulados tradicional-nacionalistas? y ¿de dónde nos vienen y a qué nos predisponen como comunidad política? Esas frases sacadas del rumor de la calle, a las que aludía al comienzo, nos pueden ayudar a hacernos una idea. Otro tanto lo sabemos quienes nos dedicamos a la enseñanza de la historia en la educación secundaria e inicial universitaria, por nuestras dificultades diarias. Y es que este oficio –cuando de verdad se ejerce– adquiere la forma de un combate en contra del *sentido común*. El libro que hoy

comentamos sin duda es una invaluable herramienta para esta ardua labor.



Pero permítaseme una última observación, ahora sobre el específico proceder historiográfico de Corvalán. Erudición y habilidad interpretativa, manejo de la historia factual y sólida formación teórico-filosófica, suelen ser cualidades que se encuentran por separado en el medio historiográfico chileno. O se es historiador o se es filósofo, sociólogo o cientista político. No nos es extraño el dato de que hasta el día de hoy en algunos centros académicos se descartan ciertos proyectos de tesis por considerarse más sociológicos, antropológicos, politológicos o filosóficos que propiamente historiográficos. Pero ¿qué podría ser la historiografía “a solas”, en el

conservador concepto de sus defensores? Pues nada, o algo muy elemental. Tal como lo entendió Claude Levi-Strauss, no podría ser más que el ordenamiento cronológico de los hechos, es decir, la fase previa al trabajo de toda ciencia social. Pero frente a esta afirmación, que cimentó el prejuicio frente a la historiografía durante el predominio del estructuralismo, se levantaron “desde dentro” otras voces: las de aquellos que se formaron en la tradición de Vico, Hegel, Marx, Febvre y Bloch. En el concepto que Pierre Vilar recogió de Febvre, si la historia debe ser entendida como un conocimiento científico, lo es a semejanza de la medicina que reúne conocimientos necesarios de distintas ciencias para resolver sus problemas (que son siempre problemas de vida o muerte): “un médico no es un químico, pero ¿puede ignorar todo acerca de la química? [...] *Saber mucho* es necesario para el especialista, *comprender suficientemente* los diversos aspectos de lo real resulta indispensable para aquel que se entrega a un esfuerzo de síntesis y es justamente este esfuerzo el que se le pide al historiador”. [7] Concepto que sólo podría completarse en el siguiente planteamiento de Michel de Certeau (que es para mí una cita recurrente por su belleza): “El pasado es, ante todo, *el medio de representar una diferencia*. [...] la figura del pasado conserva su valor primero de representar lo que falta. Con un material que, por ser objetivo, está necesariamente ahí, pero es connotativo de un pasado en la medida en que, ante todo, remite a una ausencia, esa figura introduce también la grieta de un futuro. Un grupo, ya se sabe, no puede expresar lo que tiene ante sí –lo que aún falta– más que por

una redistribución de su pasado”. [8]

* Texto leído en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Valparaíso el 4 de mayo de 2011. Compartió la mesa junto al autor reseñado el profesor Manuel Riesco (CENDA).

1. **Licenciado en Historia y Magíster en Filosofía por la Universidad de Valparaíso. Becario CONICYT del Programa de Doctorado en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chile. Académico del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso y profesor de la carrera de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Viña del Mar.**
2. **Ministerio de Educación, *Revista de Educación*, Nº 49, 50, 51, Santiago, Noviembre de 1974, p. 3. He abordado con mayor detalle este problema en mi artículo “La memoria de la chilenización como crítica de la chilenidad”, en: *Analecta. Revista de Humanidades*, Nº 3, Centro de Estudios Humanísticos Integrados de la Universidad de Viña del Mar, 2009.**
3. **Uribe, Armando, “El Fantasma de la Sinrazón”, en: *El Fantasma de la Sinrazón & El Secreto de la Poesía*, Santiago de Chile, Editores Be-uve-dráis, 2001, p. 17.**
4. **Dujovne, León, *La filosofía de la historia en la antigüedad y en la edad media*, Buenos Aires, Galatea/Nueva Visión, p. 29.**
5. **Finkelkraut, Alain, *La derrota del pensamiento*, Barcelona, Anagrama, 2000, pp. 15-16.**
6. **Montesquieu, *la política y la historia*, Madrid, Editorial Ciencia Nueva, 1968, pp. 37 y 22.**
7. **Vilar, Pierre, “Pensar históricamente”, en: *Pensar la Historia*, México, Instituto Mora, 1992, p. 30.**
8. **Certeau de, Michel, “La operación histórica”, en: Jacques Le Goff y Pierre Nora (comp.), *Hacer la historia*, Editorial Laia, Barcelona, 1985, p.53.**

Índice.

- *Editorial CdE n.º. 17* 2 - 3 pp.
- *Universidades públicas. Por Manuel Riesco Larraín* 7 - 10 pp.
- *Recensión del Libro "Se derrumba un mito: Chile reforma sus sistemas privatizados de educación y previsión" de Manuel Riesco Larraín . Por Gustavo Quintana Muñoz* 11—16 pp.
- *Presentación a Nacionalismo y Autoritarismo durante el siglo XX en Chile. Los orígenes, 1903-1931 de Luis Corvalán Marquéz. Por Pablo Aravena Núñez* 17—23 pp.

V I S Í T A N O S

<http://cuadernosdeeducacion.wordpress.com/>

Quiénes Somos

Como grupo de académicos de izquierda mantenemos desde hace un tiempo una reflexión *acerca* de la educación superior en Chile. En conocimiento de que otros colegas han estado preocupados por una problemática similar, y han elaborado trabajos al respecto, les invitamos, por medio de esta hoja a debatir en conjunto. Esperamos que este sea el embrión de una futura discusión que no dudamos será enriquecida gracias al debate.

Por supuesto que para que este debate rinda frutos, debe incluir a todos quienes estamos por un nuevo sistema universitario, razón por la cual desde ya invitamos a contribuir en números posteriores a quienes entiendan la Universidad de manera no funcional al actual modelo económico.

